

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

**Vistos:**

**Primero:** Que el día seis de septiembre del año en curso, ante esta Sala del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituida por doña Paula Rodríguez Fondón, en calidad de Jueza presidenta de sala; y las magistradas doña Gloria Canales Abarca como Jueza redactora y doña Nora Rosati Jerez, como tercera jueza integrante, se llevó a efecto el Juicio Oral Rol Único de Causa N° **1801186533-6**, Rol Interno del Tribunal N° **541-2019**, seguido contra **LUCÍA ANDREA VARGAS PALACIOS**, cédula nacional de identidad N° 17.151.619-6, nacida en Santiago, el 05 de Junio de 1989, 32 años, soltera, trabajadora de la construcción, domiciliada en avenida El Conquistador Block N° 1747, departamento 26, comuna de Maipú, actualmente privada de libertad por causa diversa.

Fue parte acusadora en el presente juicio el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto don Cristian Suarez Pérez, en tanto que la Defensa de la acusada estuvo a cargo de las abogadas de la Defensoría Penal Pública, doña Alicia Parra Peralta y Natalia Fernández Díaz, todos, con domicilio y forma de notificación registrados en el Tribunal.

**Segundo:** Que el Ministerio Público al deducir acusación, según se lee en el auto de apertura del juicio oral, la fundó en los siguientes hechos:

“El día 01 de Diciembre del año 2018, al interior del Centro de Detención Femenino Mayor Marisol Estay, ubicado en calle San Francisco N° 4756 de la Comuna de San Miguel, la imputada KATHERINE LORETO TAPIA TORRES ingresó al recinto penitenciario 01 envoltorio de nylon transparente, contenedor de 25 comprimidos de fentermina y 07 mitades de dichos comprimidos y asimismo, 01 envoltorio de nylon transparente que contenía cocaína con un peso bruto de 35 gramos. Sustancias que la imputada transfirió a una interna del Centro Penitenciario, doña **LUCIA ANDREA VARGAS PALACIOS**, siendo posteriormente detenida esta última con dicha sustancia en su poder siendo detenida la imputada Katherine Tapia Torres quien habría guardado, poseído y mantenido en su poder dichas sustancias para luego ingresarlas al citado recinto penitenciario.”

A juicio del Ministerio Público tales hechos configuran el delito consumado de **TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN PEQUEÑAS CANTIDADES**, previsto y sancionado en el artículo 4° en relación al 1° de la Ley N° 20.000, atribuyéndole a la acusada participación en calidad de autora del mismo, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Añade que respecto a la acusada **LUCÍA ANDREA VARGAS PALACIOS**, le perjudica la circunstancia calificante comprendida en el artículo 19 letra h) de la ley 20.000.

Es por ello solicita sea condenada a una pena de **cinco** años de presidio menor en su grado máximo y multa de **40** Unidades Tributarias Mensuales, más

accesorias legales, el comiso de los efectos e instrumentos del delito y las costas de la causa.

Pide además, que una vez ejecutoriada la respectiva sentencia condenatoria, se ordene la incorporación de su huella genética en el registro de condenados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 c) de la Ley N° 19.970.

**Tercero:** Que en su **alegato de apertura** la Fiscalía ratificó el contenido de su acusación, ofreciendo acreditar los fundamentos de hecho de la misma.

Concluida la rendición de la prueba en su **alegato de clausura** insistió en que cree que ha dado cumplimiento con la promesa inicial porque se acreditó más allá de toda duda razonable el delito y la participación de la acusada en la misma. Las funcionarias de gendarmería dan cuenta de las circunstancias en las cuales la acusada fue objeto de un registro y la incautación de droga con las cantidades indicadas. La documentación acompañada y los peritajes corroboran lo indicado por las testigos.

La dinámica de los hechos descartan una vulneración de garantías, ambas funcionarias dan cuenta de la existencia inicial, de una sospecha en cuanto a algunos comportamientos extraños que estaba realizando Lucía Vargas Palacios, esto en relación con Katherine Tapia Torres, refiriéndose como abrazos que se estaban realizando. Sin embargo, aun sin realizar algún tipo de registro se comienza a avanzar en esta labor de vigilancia de la que era objeto la imputada Lucía Vargas Palacios y se logra realizar un llamado telefónico el que da cuenta de que un funcionario en base al monitoreo que efectivamente se habría producido la entrega de una sustancia ilícita de Katherine a la imputada. Aun así no se realizaba todavía ningún registro, ni siquiera la acusada era llevada a alguna dependencia especial con el objeto de realizar algún registro. El tribunal tuvo acceso a uno de los videos donde se aprecia la conducta de postura de introducción de objetos en su cavidad vaginal que se estaba llevando a cabo por doña Lucía Vargas Palacios, ya no se trataba de meras sospechas, sino que de indicios relevantes e importantes en cuanto a la introducción de algún objeto en su cavidad vaginal, lo que en definitiva llevó a tomar noticia de la situación de la acusada, lo que es comunicado a la capitán Ana Pinto Rojas, quien registra superficialmente a la acusada, lo que no dio resultado, pero en base a una entrega voluntaria de la droga que se da por parte de la imputada se pudo establecer precisamente que mantenía oculto en su cavidad vaginal la droga. No existe ningún tipo de vulneración.

Señaló que estamos frente a un delito del artículo 4 de la ley 20000, porque no es una cantidad menor, se trata de clorhidrato de cocaína con más de un 50% de pureza, como asimismo la circunstancia de encontrarse con varias tabletas o comprimidos posible de ser usadas por varios consumidores, que superan un consumo racional y próximo en el tiempo.

Además la incautación se produce en un establecimiento penitenciario, donde las cantidades de drogas se ven disminuidas por la clandestinidad propia que se realiza en dicho centro penitenciario. Las circunstancias de

ocultación revelan por parte de Lucía Vargas Palacios, la posibilidad de hacer ingreso a los respectivos módulos con la droga en su poder. En ese contexto estamos frente a hipótesis de porte de unas cantidades que no pueden ser consideradas de consumo próximo en el tiempo, sino que deben ser consideradas de manera indiciaria como un delito del artículo 4° de la ley 20.000.

Haciendo uso de su derecho a **réplica**, sostuvo que es claro que la sustancia que fue objeto de pericia corresponde a los N.U.E referidos, tomando en consideración la propia declaración de los testigos, la propia prueba documental con los oficios remisores, asimismo con las actas de recepción de la droga y su correspondiente peritaje. No existe ninguna duda en que esas sustancias fueron las en definitiva periciadas.

En cuanto al artículo 197 del Código Procesal Penal, entendiendo sobre todo que este artículo exige en cierta forma consultar a la persona que puede ser objeto de exámenes su voluntariedad. De manera alguna puede estimarse como apremiante una consulta que ese propio artículo establece, en aquellos casos que no se autoriza un examen corporal, es posible pedir una autorización judicial, lo que no ocurrió en este caso porque hubo una entrega voluntaria. De manera alguna puede estimarse que esa consulta produce apremio en cuanto si autoriza o no una revisión corporal.

En cuanto a la mera sospecha estamos en contexto de un recinto penitenciario, no es la vía pública, es un recinto que ya es objeto de control por parte de Gendarmería tanto a nivel reglamentario como legal. En ese contexto, si bien inicialmente podríamos decir que existían meras sospechas, esto va aumentando de acuerdo a la labor de vigilancia y control que realiza Gendarmería porque a esa mera sospecha se le va sumando el video que es observado por un funcionario, y que da cuenta que hay un objeto que es entregado a la acusada. Es más, posteriormente da cuenta de acuerdo al video exigido en el minuto número uno que se observa claramente a la imputada se ingresa algo entremedio de las piernas. Eso supera las meras sospechas. Eso habilitaría en la vía pública una especie de control de identidad.

De acuerdo al principio de congruencia que es claro que de acuerdo a los hechos el ingreso lo realiza Katherine Torres y la entrega se realiza a la acusada Lucía Vargas Palacios quien mantenía la droga en su poder como lo señala la acusación.

**Cuarto:** La Defensa en su **alegato de apertura** indicó que el Ministerio Público no podrá traspasar dos límites, primero el contenido de la acusación fiscal que señala que su representada era receptora de una sustancia que le había transferido Katherine Torres, es una descripción que coloca a su defendida en calidad de receptora de cantidades que por su mínima extensión puede presumirse que eran para consumo. La comercialización que señala el Fiscal son circunstancias que no son contenidas en la acusación. Un segundo

límite es que aquel que dice relación con que hubo infracción de garantías y no siendo posible superar ambas barreras la sentencia deberá ser absolutoria.

Y en su **alegato de clausura** señaló que el ministerio público debía sortear ciertos impedimentos para lograr convicción en el tribunal, uno de ellos era el principio de congruencia en relación a la forma en que se describen los hechos en la acusación. Debía además mostrarse cómo la obtención de la prueba se había ajustado al debido proceso y en ahora surge un tercer impedimento para lograr esta convicción de condena en el tribunal. Y este impedimento es la insuficiencia de la prueba rendida.

Señala que se mantiene en su posición respecto al principio de congruencia tanto en la calificación jurídica que hace el ministerio público respecto a su representada como autora de tráfico de pequeñas cantidades como respecto a la calificante. Quedo claro de la declaración de los funcionarios, pero queda aún más claro del propio tenor de la acusación que los hechos ocurren al interior de un recinto penitenciario donde su representada estaba en calidad de interna en prisión preventiva, por lo que mal podría ella encontrarse al interior de este recinto de detención preventiva ingresar algún elemento y de la propia descripción que hace la acusación parece que quien ingresa esta supuesta sustancia es Katherine Tapia que es identificada por las funcionarias como la ciudadana que venía de visita y que previo a llegar a este espacio que es parte del centro de detención preventiva pasa por los controles, por lo tanto la conducta que se atribuye a su representada en definitiva es haber supuestamente recibido esta sustancia encontrándose ella al interior de este centro. Por lo tanto, considerando que ella es más bien la receptora y considerando las cantidades de droga incautada, entiende que es presumible que sea para su consumo exclusivo y próximo en el tiempo y que en cualquier caso la calificante no le es aplicable a ella, dada la condición en que se encontraba de privación de libertad.

En cuanto a la infracción de garantías que alega, ella ocurre y por distintas circunstancias, primero la funcionaria Cristina Casanova observa conductas sospechosas, movimientos, abrazos, cercanía en un patio donde se produce una visita respecto de mujeres que se encuentran privadas de libertad, por lo que desde ese punto de vista no aparecen tan sospechosas. A raíz de eso se comunica con un funcionario de la central de cámaras y quien habría observado estas mismas conductas y este supuesto traspaso que entrega Katherine a Lucía. Del video que se pudo observar, mayores conductas extrañas no se aprecian en un patio de visitas para personas privadas de libertad. Sin embargo, suponiendo que este funcionario de Gendarmería, que no presta declaración en la audiencia, haya visto este traspaso, hasta ese momento no se sabe qué es, no se puede atribuir inmediatamente a que nos encontramos frente a una infracción a la ley 20000. La funcionaria Casanova pide apoyo, se constituye Ana Pino, pero Casanova dice que esta última le cuenta qué es lo que se incautó, no observa el procedimiento. Se dice que Lucía voluntariamente

habría entregado esta sustancia a la funcionaria Pino, pero ella no observa este procedimiento. Luego, Ana Pino indica que ella la separa del grupo, la lleva a la guardia interna a Lucía, le hace el registro superficial, no encuentra nada contrario al reglamento. En este registro superficial, los indicios dan cuenta de que no había encontrado nada, hasta que le indica a su que la vieron introducirse algo en la cavidad vaginal y que si ella no le entrega voluntariamente seria trasladada al hospital penal para ser revisada por un matrón. Qué es esa advertencia a una persona que se encuentra bajo la custodia de gendarmería, privada de libertad, a la que se le está señalando que será trasladada hasta un hospital para revisar su cavidad vaginal. Qué tan voluntaria es esa entrega, de hecho la funcionaria indica que previamente le había informado sus derechos, lo que resulta llamativo porque hasta ese momento no había ninguna razón para informarle ningún tipo de derecho, salvo un eventual procedimiento administrativo, pero todas estas diligencias intrusivas realizadas por funcionarios de gendarmería se realizan previa comunicación con el fiscal de turno. Este procedimiento se inicia a las 15:00 horas y el Fiscal de turno toma conocimiento de esto después de las 18:00 horas, cuando ya se había realizado la incautación y prueba de campo. En el intertanto, es cuando Ana Pino le dice a la imputada que si no entrega voluntariamente lo que tiene, será trasladada al Hospital donde un matrón la revisaría. Y qué hubiese sucedido si su representada se hubiese negado a esa revisión ginecológica. Ana Pino señala que la acusada que ya estaba nerviosa, se puso más nerviosa, claramente la situación en que se encontraba constituye en esta afirmación un apremio verbal por parte de la funcionaria Pino y de allí surge todo el procedimiento que a su juicio da cuenta de la vulneración a la que ha referido y por tanto, lo que se haya incautado de aquel procedimiento no debiese ser valorado positivamente por el tribunal.

Un tercer punto dice relación con la insuficiencia de la prueba, Ana Pino es la que hace la incautación, que habría observado una serie de comprimidos y una sustancia color ocre. Luego, el persecutor, al término de su prueba muestra la prueba documental y la prueba pericial en relación a una determinada sustancia individualizada en aquella. No existe una secuencia lógica entre lo incautado, lo remitido y lo periciado. Lo que hace que se mantenga esta continuidad e identidad entre lo que se incauta, lo que se remite para la pericia y lo que se pericia es la cadena de custodia. En el juicio no ha habido ninguna referencia por parte de los testigos en relación a quién, cómo, cuándo y dónde y qué números se entrega bajo cadena de custodia a las especies que luego aparecían como periciadas. Este salto lógico, entre la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial es lo que considera de una insuficiencia tal, porque es el tribunal el que tendría que justificar este salto lógico para darle una continuidad y una identidad a lo que se incauta y a lo que se pericia. Esto impide considerar suficiente la prueba para establecer que aquello que se incautó son aquellas sustancias contempladas en la ley 20.000.

Haciendo uso de su derecho a **réplica** indicó que la suposición de entregar la sustancia a los módulos es una mera suposición no está descrito en la acusación, de ahí que hace mención al principio de congruencia el objetivo de comercializarlos en los módulos es una circunstancia fáctica que no está en la acusación.

Lo que declaró Ana Pino no es lo que señala la fiscal, en cuanto a indicarle a que si ella voluntariamente no quería someterse a un examen se podía requerir autorización judicial, lo que la funcionaria declaró que le dijo a doña Lucía fue que si no entregaba voluntariamente lo que tenía en su cavidad vaginal iba a ser trasladada al hospital para ser revisada por un matrón, lo que es un apremio de carácter verbal para una conducta que ni siquiera tenía el carácter de infracción reglamentaria para el CDP.

En cuanto a la insuficiencia probatoria, la falta de prueba no es prueba y el tribunal está obligado a valorar la que rinda en juicio oral, de manera que no se le exija al tribunal actuar en base a la fe. Es decir, el solo creer que debe entregar la parte acusatorio elementos sustantivos probatorios que permitan establecer una vinculación lógica entre uno y otro. En este sentido, entre lo que se incauta y lo que se pericia no existe esa conexión objetiva y lógica.

**Quinto:** Que, la acusada **Lucía Andrea Vargas Palacios**, en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, informada de sus derechos, decidió guardar silencio.

**Sexto:** Que para acreditar su teoría del caso el Ministerio Público rindió las siguientes probanzas:

**Testimonial:**

**1.- Declaración de Cristina Andrea Casanova Carreño**, Cabo de Gendarmería de Chile, quien refirió que tiene once años de servicio en Gendarmería de Chile, trabajando en módulos, visitas, y específicamente, el 1 de diciembre 2018, siendo las 15:00 horas debía cumplir funciones en el gimnasio, la acusada Lucía Vargas estaba en el módulo 4, la vio en una actitud sospechó cuando ingresó la ciudadana Katherine Torres. Es por esa razón que pidió al CCTV que le hiciera seguimiento correspondiente. Después, el funcionario Monsalve que estaba en el CCTV la llamó de vuelta diciéndole que la ciudadana le había entregado un envoltorio a la interna. La ciudadana se lo saca del sostén y la imputada se lo introduce en la cavidad vaginal. Pidió apoyo al módulo 4 donde estaba la cabo Rosales y después a guardia interna donde concurre la oficial de Régimen Interno, la teniente Pino quien fue a buscar a Lucía Vargas. El sector gimnasio quedaba al lado de la guardia interna, y retirado de todos los módulos. Esto queda en San Miguel, en calle San Francisco, no recuerda número. Su labor ese día era controlar ingreso y egreso de internas y de los ciudadanos. Lucía Vargas estaba en el sector de visitas del gimnasio, estaba con Katherine Torres abrazándose, en una actitud sospechosa, pero muy evidente, abrazándose, se daban vueltas, caminaban juntas y querían ir al baño juntas, pero ella las separó de baño, entre ciudadanas e internas.

Como las separó, la ciudadana sacó su elemento y lo introdujo en el sostén porque la cámara después vio que la ciudadana sacó el envoltorio de su sostén y se lo pasó a la interna Lucia Vargas, esto último lo vio la cámara.

Reiteró que llamó al CCTV que es la sala de cámaras y le pidió al funcionario que enfocara a la interna Lucia Vargas, y el funcionario la llama después de cinco minutos y le comenta que la ciudadana le entrega un envoltorio a la interna, que estaba sentada y se lo introduce en su cavidad vaginal. Ellas estaban a tres metros de su puesto de servicio, las veía abrazadas, pero disimulaba que no las observaba para que no se diera cuenta de que les hacía seguimiento.

Señaló que cuando habla de ciudadana se refiere a Katherine Torres e interna es Lucia Vargas Palacios. Katherine Torres fue quien le pasó el envoltorio a Lucía Vargas y ésta se lo introduce en su cavidad vaginal.

La persona a cargo de las cámaras era el cabo 2° Víctor Monsalve, que fue la persona que hizo el seguimiento cuando ella le dio aviso y la cámara quedó enfocada en ellas, les hizo seguimiento constante. Ellas estaban sentadas, había una familia que había visitado a Lucía y se juntó con otra interna, entonces estaban sentados como en redondela, en círculo. Katherine la abrazó y Lucía se lo introdujo, como tapando.

Como estaba sola en el gimnasio y no podía dejar el puesto botado, llamó al módulo 4° donde estaba la cabo Rosales, la que también se encontraba sola, por eso llamó a la guardia interna, contestando la teniente Ana Pino, quien realizó el procedimiento, yendo a buscar al gimnasio a Lucia Vargas. La teniente Pino llamó a Lucía pidiéndole que fuera un ratito y se la llevó hacia la guardia interna para realizar el procedimiento y le menciona que la había grabado cuando se estaba introduciendo el envoltorio. Después de eso Lucía entregó el envoltorio a la teniente en la oficina de la guardia interna.

A la interna le constataron lesiones y se fue al módulo para esperar lo que seguía.

Recuerda que eran 27 pastillas, 7 pastillas en mitades y un envoltorio de color ocre que no supo qué era. Eran pastillas amarillas, no sabe de qué tipo.

Señaló que es común encontrar este tipo de incautaciones en un recinto penitenciario, pero siempre con el respaldo de grabaciones, al menos ella trabaja de esa forma. Es común encontrar envoltorio como el de color ocre. Indicó que no tiene conocimiento de la cantidad de droga incautada porque otras personas tomaron ese procedimiento, ella no preguntó tampoco.

De acuerdo a su experiencia esa droga tenía como objetivo el tráfico interno en el módulo 4 porque mantenían datos de que en ese módulo estaba la hermana de Katherine Tapia y sonaba que ella vendía droga en ese modulo.

**Se le exhiben imágenes otros medios de prueba N° 1, a la fotografía N° 1** eran las 25 pastillas, el envoltorio de nylon con una sustancia de color ocre; **a la fotografía N° 2** señala que es la sustancia color ocre; **a la fotografía N° 3** indicó que es la sustancia de color ocre

**Se le exhibe otros medios de prueba N° 2**, consistente en 01 DVD-R de fecha 1 de diciembre de 2018. Señala que es la visita de Lucía Vargas, Katherine Torres. Es la que está moviendo las manos de polera roja, da vuelta la cabeza. Lucía Vargas es la que está con un cintillo y una polera color naranja. Señaló que esa era la actitud sospechosa, que miraban hacia atrás donde estaba ella. Buscaban el momento en que mirara para otro lado. Los movimientos constantes fueron sospechosos, era mucho el movimiento que realizaban, se paraban, se sentaban movían la silla buscando una postura adecuada para introducirse el elemento. Se ve que va al baño y le hace una pregunta que no recuerda cuál fue.

**A la Defensa** respondió que la imputada e interna es Lucia Vargas, estaba en prisión preventiva por estos hechos a la época. Katherine es la ciudadana que era la visita de Lucia Vargas. Esto sucedió en el gimnasio estaba dentro del Centro de Detención Preventiva. Las visitas ingresan por un control previo de Gendarmería, eso incluye revisión de las vestimentas y especies que portan.

Todo el sector estaba bajo la custodia de Gendarmería de Chile. Cuando le pide el registro de cámaras son previos al registro de las cámaras. El funcionario de la central de cámaras le contó que se había introducido un envoltorio en la cavidad vaginal, no dijo qué era. Pidió cooperación a la guardia interna y aparece Ana Pino que realiza el procedimiento.

Le preguntó a la teniente cómo había logrado que entregara el envoltorio, y ella le contó que le había señalado Lucía entrégalo porque te tiene grabada, ella no lo observó. Desconoce si la teniente le dijo que si no lo entregaba la revisaría un ginecólogo.

Tenía información que la persona que se dedicaba al tráfico en el módulo 4 era la hermana de Katherine Tapia.

**2.- Declaración de Ana Alejandra Pino Rojas**, Capitán de Gendarmería de Chile, señaló que cuando estaba de servicio en el centro penitenciario mayor Marisol Estay, la acusada Lucía Vargas Palacios, fue sorprendida en una actitud sospechosa mediante cámaras. El 1 de diciembre de 2018, mientras se encontraba de jefe interno de la unidad C.P.F. San Miguel, siendo las 15 horas la gendarme Cristina Casanova, quien se encontraba cumpliendo funciones en el sector visitas, le da cuenta que visualiza a la interna en actitud sospechosa, nerviosa, muy comprometida con una visita y le pidió ayuda. Llamó a la sala de CCTV para realizar un seguimiento. El gendarme 1° Monsalve recepcionó el llamado y efectúa seguimiento a través de cámaras y se ve el momento exacto en que la ciudadana Katherine Tapia saca de su ropa interior un objeto sospechoso, entregándoselo a Vargas y ésta se lo introduce en su cavidad vaginal. Concurrió al sector del gimnasio, conversó con la interna y junto al teniente Canales la desplazaron a la guardia interna para tomar procedimiento de rigor. En la guardia interna conversó con la acusada la que en forma voluntaria desde su cavidad vaginal sacó el ovoide y se lo entrega. Fue de



forma voluntaria porque la acusada lo entregó, se le dio lectura a sus derechos y se le señala que en las cámaras se observó escondiendo el elemento prohibido en su cavidad vaginal.

Señala que abrió el elemento junto a la gendarme 2° Nicole Aburto y al imputada, el ovoide en su interior contenía 25 comprimidos de color amarillo, ranurados en su centro, y siete mitades de las mismas, más un envoltorio de nylon transparente contenedor de una sustancia de color ocre. Se efectuó llamado al Seat de gendarmería quienes toman la prueba de campo, arrojando ser clorhidrato de cocaína cuyo peso fue de 35 gramos.

Se llamó a la Fiscalía, se proceden a elaborar pruebas de campo y cadena de custodia.

Explicó que el gimnasio queda al interior de la guardia interna de gendarmería, al interior del centro penitenciario en el lugar de visitas. Las visitas deben pasar por los procesos de revisión y control de visitas. Son revisados mujeres y hombres y después ingresan a la guardia interna por un pasillo y luego al gimnasio habilitado para los internos.

Los reclusos salen del módulo, es llamado por personal del sector de visitas y concurre al gimnasio.

Finalizada la visita a veces se efectúa revisión aleatoria antes de volver a los módulos.

**A la Defensa** respondió que la funcionaria le reporto que había una interna con actitudes sospechosas y llamó a la sala de vigilancia y se comunicó con el funcionario a cargo Monsalve. Le dijo que realizaría los seguimientos correspondientes y después le indica que la ciudadana le entrega un elemento prohibido a la interna.

Fue con otra funcionaria a buscar a Lucía y la trasladan a la guardia interna. Se le señala por qué está en el sector y ella le entrega el ovoide y le dice que estaba en la cavidad vaginal.

**Utilizada la herramienta del artículo 332 del Código Procesal Penal, para evidenciar contradicción con declaración prestada el 14 de marzo de 2019, leyendo:** “que ante la información proporcionada por la funcionaria Rosales, le comunico la información al teniente segundo Canales y le ordeno que concurra al gimnasio de visitas a tomar el procedimiento. Transcurriendo un par de minutos la interna Lucía Vargas es trasladada a la oficina donde me encontraba. Comencé a realizarle un registro corporal y, a la vez, le ordené la teniente Canales que fuera a la sala de cámaras a ver el momento de cuando la interna introduce en su cavidad vaginal algún elemento sospechoso, esto con la finalidad de asegurarme que la interna se introdujo algo.”

Señaló que puede ser que le haya realizado un registro corporal, porque ha pasado mucho tiempo, pero solo superficial, ella no lo extrajo nada, sólo se revisa sus prendas siempre en presencia de otra persona, pero jamás más allá.

La interna entregó en forma voluntaria el elemento, se le indicó que estaban las grabaciones.

Se le dieron a conocer sus derechos porque tiene derecho a ser informada de lo que estaba sucediendo.

Le dijo a la interna qué pasaba, que procedimiento se iba a adoptar, se le indica el procedimiento a seguir.

Señaló que no recordaba si le señaló algo más si ella se negaba a entregar el elemento.

**Se realiza ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal con la misma declaración, se lee:** “Que, debo señalar que al finalizar el registro corporal superficial de la interna Lucía Vargas Palacios, y al no encontrarse ningún elemento prohibido, se le preguntó directamente si tenía algún objeto en su cavidad vaginal, ya que existía una grabación del momento cuando se introdujo algo en su vagina y que además, dada las circunstancias sería derivada hacia el hospital penal para que fuera revisada por un matrón. En ese mismo instante, la interna se pone nerviosa y me reconoce que tiene algo oculto en su cavidad vaginal. En ese mismo instante, la interna en forma voluntaria introdujo sus manos en su zona vaginal y extrae un envoltorio de nylon transparente...”.

Le señaló que lo del matrón es el procedimiento que se realiza al informarle al Fiscal de turno en caso de que se nieguen a entregar el elemento, pero ella lo entrega de forma voluntaria. La interna estaba nerviosa desde que se le señala lo que está sucediendo.

Esto comenzó a las 15 horas, ella quedó a cargo del procedimiento, se tomó contacto con la fiscalía como a las 18 horas. No recuerda a qué hora se remitieron las sustancias al Seat.

Se llamó de inmediato a la fiscalía, hubo demoras porque se realiza la prueba de campo y el pesaje.

**Documental:**

- 1. Oficio remitir de droga N° 3586**, de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por el Jefe (S) de Sección Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile, dirigido al Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
- 2. Acta de recepción N° 7013-2018**, de fecha 04 de diciembre de 2018, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
- 3. Reservado N° 20798-2018**, de fecha 15 de febrero de 2019, del Instituto de Salud Pública, suscrito por don Iván Triviño A., Jefe del Subdepartamento Sustancias Ilícitas.
- 4. Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de COCAINA BASE**, suscrito por la perito químico Katherinne Alcamán Pantoja, del Instituto de Salud Pública.
- 5. Oficio remitir de droga N° 3587**, de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por el Jefe (S) de Sección Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile, dirigido al Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

6. **Acta de recepción N° 7012-2018**, de fecha 04 de diciembre de 2018, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
7. **Reservado N° 20797-2018**, de fecha 15 de febrero de 2019, del Instituto de Salud Pública, suscrito por don Iván Triviño A., Jefe del Subdepartamento Sustancias Ilícitas.
8. **Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de FENTERMINA**, suscrito por el perito químico René Rocha Barrasa, del Instituto de Salud Pública.

#### **Prueba Pericial.**

1.- Protocolo de Análisis Químico, de fecha 15 de febrero de 2019, Código de Muestra 20798-2018-M1-1, relativo a la NUE 5086454, emitido por el Subdepartamento Sustancias Ilícitas del Instituto de Salud Pública, suscrito por la perito químico doña Katherinne Alcamán Pantoja, domiciliada en calle Marathon N°1000, comuna de Ñuñoa; acompañado de conformidad al artículo 315 inciso 2° del Código Procesal Penal.

2.- Protocolo de Análisis Químico, de fecha 15 de febrero de 2019, Código de Muestra 20797-2018-M1-1, relativo a la NUE 5086453, emitido por el Subdepartamento Sustancias Ilícitas del Instituto de Salud Pública, suscrito por el perito químico René Rocha Barrasa, domiciliado en calle Marathon N°1000, comuna de Ñuñoa; acompañado de conformidad al artículo 315 inciso 2° del Código Procesal Penal.

#### **Otros Medios de Prueba**

1. **Set Fotográfico**, compuesto de 03 imágenes que ilustran la droga incautada y su pesaje, tomadas por funcionarias de Gendarmería de Chile.
2. **01 DVD-R**, contenedor de la fijación fílmica de la comisión del delito, realizada por funcionarias de Gendarmería de Chile, relativo al Parte Denuncia N° 439, de fecha 01 de diciembre de 2018.

**Séptimo:** Que, para que se configure el delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 4° de la ley 20.000, en relación con el artículo 1° de la misma ley se requiere la realización de la conducta de poseer, guardar o portar consigo, pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas o de materias primas que sirvan para obtenerlas, desprendiéndose del inciso 2° del artículo 4° de la Ley 20.000, que además se entiende que incurre en el delito de microtráfico, quien adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título, pequeñas cantidades de estas sustancias o materias primas con el objeto de que sean consumidas o usadas por otro, pudiendo concluirse que se requiere en síntesis, la verificación indistinta de cualquiera de los verbos rectores descritos en la norma para configurar el ilícito, además de la existencia de un objeto material preciso, que son **pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes** con idoneidad suficiente para producir dependencia física y psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables en la salud, sea que se trate de las sustancias referidas en el inciso primero o segundo del artículo 1° de la ley

20.000, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, resultando indispensable igualmente la configuración de los elementos normativos del tipo, relacionado con la antijuridicidad, es decir, se debe realizar el verbo rector sin contar con la autorización competente, y además, la posesión o tenencia de la droga no debe estar destinada al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo por parte del agente.

Que en el contexto del análisis de esta figura delictiva cabe hacer presente que los verbos rectores que se describen en los incisos 1° y 2° del artículo 4° de la Ley 20.000 son claramente más restringidos que aquellos que el legislador estableció en el artículo 3° para tipificar el delito de tráfico de drogas, lo que en concepto del tribunal se explica por el carácter de figura privilegiada que tiene el microtráfico en relación al tráfico del artículo 3° debido a que sólo involucra pequeñas cantidades del objeto material, siendo por lo tanto menor la antijuridicidad de la conducta, no justificándose por lo tanto la misma amplitud en la descripción de la conducta constitutiva del tipo.

Estos verbos, cuya realización se concreta en relación al concepto regulativo de pequeña cantidad, sólo consisten en **poseer, transportar, guardar y portar consigo** la pequeña cantidad del objeto material, y en **adquirir, suministrar o facilitar a cualquier título el objeto material a terceros**. Recurriendo, a título de referencia para clarificar el sentido y alcance de dichos verbos rectores al diccionario de la Real Academia se puede concluir que **poseer** consiste en “tener en su poder algo”, **transportar** alude a “llevar a alguien o algo de un lugar a otro”, la voz **guardar** se refiere “a tener cuidado de algo, vigilarlo o defenderlo, poner algo donde esté seguro y **portar consigo** alude simplemente a “llevar o traer”. En relación a los verbos rectores del inciso 2° del artículo 4° la expresión **adquirir** implica “ganar, conseguir por el propio trabajo o industria, comprar, coger, lograr, conseguir”, suministrar alude a “proveer a alguien de algo que necesita” y facilitar significa “proporcionar o entregar”, en este caso, el objeto material, en pequeñas cantidades. Del análisis de todos estos verbos rectores se desprende inequívocamente que quien realiza la conducta del microtráfico debe tener la facultad de disponer del objeto material de que se trata, de decidir en cuanto a su uso, es decir, los verbos en comento son indiciarios de que el agente debe mantener el control respecto al lugar en que mantiene las sustancias y también respecto del empleo y destino que ha de darse a la sustancia, pudiendo deducirse que quien carece completamente del poder de resolver respecto al uso, empleo y destino de la droga, aunque comparta circunstancialmente el mismo espacio físico que el agente, no incurre por ese sólo hecho en ninguna de las figuras asociadas al microtráfico.

**Octavo:** Que, dicho lo anterior, en primer término, para establecer que la evidencia incautada corresponde a alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, se contó con el **Oficio remitido de droga N° 3586**, de fecha 04 de

diciembre de 2018, mediante el cual el Sargento 2° de Gendarmería Ramón Flores Fuenzalida remite al Servicio de Salud Metropolitano Oriente 35,0 gramos bruto de una sustancia color ocre, que de acuerdo a la prueba de campo arrojó positivo a la presencia de clorhidrato de cocaína consignada bajo la N.U.E. 5086454; **Acta de Recepción del Servicio de Salud Metropolitana Oriente N° Acta de recepción N° 7013-2018** de fecha 4 de septiembre de 2018, que da cuenta de la recepción del Oficio N° 3586 de la misma fecha, el que tiene su origen en el parte N° 439 del Centro Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería, haciendo mención a la recepción de droga incautada en dicho procedimiento, consistente en 34,5 gramos neto de cocaína de un polvo beige, la que fue entregada con el formulario de cadena de custodia **NUE 5086454**.

**Oficio Reservado N° 20798-2018**, de fecha 15 de febrero de 2019, del Instituto de Salud Pública, suscrito por don Iván Triviño, Jefe del Subdepartamento Sustancias Ilícitas, que remite **copia del protocolo de análisis** realizados en el laboratorio de dicha unidad que concluye que la muestra sometida a peritaje **correspondiente al código de muestra 20798-2018-M1-1 correspondiente a la NUE 5086454** corresponde a cocaína base 52%.

**En cuanto a la sustancia incautada**, establecido que la sustancia decomisada corresponde a cocaína base, su potencialidad para producir dependencia física o psíquica y los otros efectos tóxicos indicados en el artículo 1° de la Ley 20.000 y 1° de su reglamento, se acreditó principalmente a través de la prueba documental, en concreto, el **informe sobre peligros para la salud pública**, que concluye que el uso de cocaína base presenta efectos nocivos principalmente en el Sistema Nervioso Central y cardiovascular y Hepático, riesgo de sufrir trombosis, derrame cerebral y otros, lo cual permite concluir que esta droga puede acarrear perjuicios a jóvenes en pleno desarrollo físico o intelectual y por ende a la sociedad.

También, se contó con el **Oficio remitir N° 3587** de fecha 4 de diciembre de 2018 por medio del cual el sargento 2° de Gendarmería perteneciente a la Sección de Adiestramiento Canino Ramón Flores Fuenzalida remite al Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente la cantidad de 7.9 gramos bruto de 01 envoltorio de nylon transparente, contenedor de 25 comprimidos de color amarillo, ranurados en su centro, más 07 mitades de la misma y **Acta de Recepción del Servicio de Salud Metropolitano Oriente N°7012-2018** de la misma fecha, que da cuenta de la recepción del oficio N° 3587, que tiene su origen en el parte N°439 de fecha 4 de diciembre de 2018 del Centro Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería, haciendo mención a la recepción de fármacos incautados (comprimidos amarillos) 7,3 gramos neto bajo la NUE 5086453, consistente en una bolsa con 24 comprimidos enteros más 8 trozos de los mismos comprimidos.

**Junto al Oficio Reservado N° 20797-2018** de fecha 15 de febrero de 2019 del Jefe del Departamento de Sustancias Ilícitas, que remite copia de protocolo de análisis realizado en el laboratorio de dicha unidad, el que concluye que el

**Protocolo de Análisis correspondiente al código de muestra 20797-2019-M1-1 bajo la NUE 5086453** corresponde a Fentermina.

En cuanto a los fármacos decomisados, establecido que corresponden a Fentermina, su potencialidad para producir dependencia física o psíquica y los otros efectos tóxicos indicados en el artículo 1° de la Ley 20.000 y 1° de su reglamento, se acreditó principalmente a través de la prueba documental, en concreto, el **informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Fentermina**, que concluye que es un anorexígeno (inhibidor del apetito) relacionado estructuralmente con al anfetamina. La prescripción de un anorexígeno está contraindicada en pacientes con antecedentes psiquiátricos, hipertensión, hipertiroidismo, sujetos portadores de cardiopatías graves, glaucoma, hipertensión arterial pulmonar y en aquellos que tienen propensión al abuso de medicamentoso, alcohólicos o tabaquismo. Debido a la posibilidad de abuso y de adicción de esta sustancia, esta droga se encuentra controlada en su prescripción y venta, lo cual implica la presentación de receta cheque para su despacho.

**En resumen**, con el mérito de los informes periciales de las sustancia incautadas, se estableció que la evidencia incautada consignada en el parte denuncia N°439 de fecha 1 de diciembre de 2018 del sr. Alcaide del C.P.F. San Miguel y luego remitida al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, para su análisis, correspondía a 27 comprimidos de Fentermina, más 7 comprimidos en mitades de la misma sustancia, más un envoltorio de nylon con un peso bruto de 35 gramos de cocaína, comprobándose que se trata de sustancias o drogas estupefacientes productora de dependencia física o síquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública.

**Noveno:** Que, para acreditar si la acusada incurrió en alguna de las conductas que permiten establecer la existencia de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, es decir, si se incurrió en la ejecución del **verbo rector**, específicamente las conductas **portar, poseer y guardar**, imputable a **Lucía Andrea Vargas Palacios**, se estableció considerando, en primer término, la prueba testimonial, conformada con la declaración conteste en sus puntos esenciales de los funcionarias que participaron en el procedimiento al interior del recinto carcelario donde la acusada se encontraba recluida, **Cristina Andrea Casanova Carreño** cabo de Gendarmería de Chile y la capitán **Ana Alejandra Pino Rojas**, ambas concordaron en que los hechos tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2018. Específicamente **Cristina Casanova Carreño** señaló que eran las 15:00 horas, horario en que las internas se encontraban recibiendo visitas, una de ellas era Katherine que visitaba a Lucía Vargas quien se encontraba recluida en el módulo 4 de dicho recinto penitenciario. Agregó que en esa ocasión la visita se estaba desarrollando en el gimnasio y advirtió una serie de actitudes sospechosas entre ambas, se abrazaban pero de una forma muy evidente, se daban vueltas para mirar en la dirección que ella estaba custodiándolas,

caminaban juntas. Junto a ellas había más personas que habían asistido ido a visitar a la acusada, las que estaban sentadas como en círculo, además quisieron ir también juntas al baño, pero ella las separó, mandando a una al baño de internas y a la otra al baño de público. Esto la alertó, por lo que llamó a personal de CCTV que es el lugar donde ubica la sala de cámaras pidiéndole al cabo 2° Víctor Monsalve que hiciera un seguimiento a la interna Lucía Vargas Palacios y, pasado unos cinco minutos el funcionario la llamó indicando que la mujer que estaba de visita en el gimnasio, Karen Torres le había entregado a la interna, que se encontraba sentada, un envoltorio, el que la acusada se introdujo en la cavidad vaginal.

El relato de la testigo fue respaldado con la reproducción de las grabaciones efectuadas por la CCTV contenidas en el acápite **otros medios de prueba N° 1 consistente en DVD-R**, en las que se aprecia las conductas que le parecieron sospechosas a las que aludió la testigo y los movimientos que cada una de ellas efectuaba.

Ratificando el relato de la funcionaria encargada de la guardia el día de la visita, se contó además con el testimonio de **Ana Alejandra Pino Rojas**, capitán de Gendarmería, quien recordó que estando de servicio en el centro penitenciario mayor Marisol Estay, la acusada fue sorprendida en una actitud sospechosa a través de cámaras. Indicó que en esa oportunidad estaba de jefe interno de la unidad, cuando cerca de las 15:00 horas la gendarme Cristina Casanova le informa que ve a la interna en una actitud sospechosa, nerviosa, muy comprometida con una visita. Llamó a la sala de CCTV para realizar un seguimiento y el gendarme Monsalve efectuó una vigilancia a través de las cámaras en las que se ve el momento exacto en que Katherine Tapia saca desde su ropa interior un objeto sospechoso, entregándoselo a Lucía Vargas, quien se lo introduce en la cavidad vaginal.

Señaló que a raíz de lo anterior, fue al gimnasio, conversó con la interna y junto a otro funcionario la trasladaron a la guardia interna para realizar el procedimiento de rigor. En dicho lugar conversó con Lucía Vargas Palacios informándola de la razón por la que la había trasladado al sector, es decir, que las cámaras habían detectado escondiendo un elemento prohibido en su vagina, por lo que la interna en forma voluntaria se sacó el ovoide desde la cavidad vaginal y se lo entregó. Indicó que el ovoide contenía 25 comprimidos de color amarillo ranurados en su centro, más 7 mitades de los mismos comprimidos, más un envoltorio de nylon transparente contenedor de una sustancia de color ocre, que luego de la realización de la prueba de campo arrojó coloración positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 35 gramos.

El relato de los funcionarios policiales se vio respaldado con la **exhibición de los otros medios de prueba N° 1**, consistente en las fotografías que muestran las sustancias incautadas y su pesaje.

**Que en lo que respecta a la objetividad y credibilidad de las funcionarias** antes individualizadas, en la especie, no se aportó antecedente

alguno que permitiera suponer a estas sentenciadoras que las testigos hubieren faltado a la verdad o declarado motivadas por animadversión, afán de venganza o por algún vínculo previo con la acusada, que las haya motivado a mentir a tergiversar su real conocimiento de los hechos con el propósito de perjudicarla, teniendo en consideración que de acuerdo a la narración de los sucesos por ellas efectuada, se advierte que describieron lo acontecido de manera lógica, coherente, dando detallada razón de sus dichos y de las circunstancias en las que fue sorprendida recibiendo un elemento sospechoso primero y luego poseyendo y guardando un elemento prohibido al interior de su cuerpo, en una zona íntima, apreciándose informadas y ubicadas en el contexto temporal y espacial en que se desarrollaron los sucesos, superando con éxito el correspondiente contraexamen de la defensa que no tuvo el mérito de desacreditar su idoneidad o credibilidad como testigos, resultando sus declaraciones concordantes entre sí y en relación con los demás medios de prueba –documental, pericial y los otros medios de prueba- de forma tal que en su conjunto fueron suficientes, pertinentes y substanciales a la hora de probar los presupuestos fácticos de la tesis de cargo y la participación atribuida a la acusada.

Relato que además se vio respaldado por el registro audiovisual incorporado en audiencia.

**En resumen**, con el mérito de las fotografías incorporadas durante la audiencia y la reproducción del video de las cámaras de seguridad de la CCTV del gimnasio del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, de las declaraciones contestes y verosímiles de las funcionarias de Gendarmería de Chile **Cristina Casanova Carreño y Ana Pino Rojas**, quienes apreciaron directamente los hechos a los que se refieren, se estableció que Katherine Tapia Torres en circunstancias que visitaba a la acusada Lucia Andrea Vargas Palacios, quien se encontraba recluida en el C.P.F. de San Miguel a la fecha de los hechos, entregó un envoltorio de nylon a Vargas Palacios la que lo guardó en su vagina, el que contenía pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, como cocaína base y fármacos que resultaron ser Fentermina, configurando con ello una o más conductas típica descritas por el legislador en la ley N° 20.000.

Así habiendo realizado la enjuiciada conductas constitutivas de a lo menos tres de los varios verbos rectores contemplados en la Ley 20.000, a saber, portar, poseer, guardar, se estima que se cumple con el **aspecto objetivo del tipo penal del tráfico ilícito de sustancias o drogas en pequeñas cantidades**.

Por otra parte, en cuanto al elemento normativo del tipo, asociado a la antijuridicidad, consistente en la inexistencia de autorización de la autoridad competente, éste se desprende principalmente del mérito de los informes sobre efectos y peligrosidad de la cocaína base y la Fentermina, que concluyen que en nuestro país ninguna persona está autorizada para portar, distribuir, consumir o vender dichas sustancias ilícitas.



El delito se **consumó** desde que se ejecutaron cada una de las conductas acreditadas y descritas precedentemente, en grado perfecto.

**Décimo:** Que con las pruebas de cargo citadas, apreciadas con libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, este Tribunal ha adquirido, más allá de toda duda razonable, la convicción:

“El día 01 de Diciembre del año 2018, al interior del Centro de Detención Femenino Mayor Marisol Estay, ubicado en calle San Francisco N° 4756 de la Comuna de San Miguel, Katherine Tapia Torres ingresó al recinto penitenciario 01 envoltorio de nylon transparente, contenedor de 25 comprimidos de Fentermina y 07 mitades de dichos comprimidos y asimismo, 01 envoltorio de nylon transparente que contenía cocaína con un peso bruto de 35 gramos. Sustancias que la imputada trasfirió a una interna del Centro Penitenciario, doña **Lucía Andrea Vargas Palacios**, siendo posteriormente detenida esta última con dichas sustancias en su poder.”

Que, el hecho así descrito, debe calificarse como un delito de Tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 4° de la Ley 20.000, en relación al artículo 1 de la misma ley, y al artículo 1 del reglamento de la misma.

**Undécimo:** Que, la **participación** de Lucía Andrea Vargas Palacios, si bien se analizó conjuntamente con los elementos configurativos del delito, no está de más indicar que la misma fue determinada con la declaraciones de las funcionarias de Gendarmería de Chile que el día de los hechos estaban de turno en el recinto penitenciario donde estaba privada de libertad la acusada, **Cristina Casanova Carreño y Ana Alejandra Pino Rojas**. La primera de ellas porque se percató de una serie de conductas que daban cuenta de una interacción sospechosa entre una mujer que visitaba a Vargas Palacios, lo que motivó a que comunicara a los encargados del circuito de cámaras para que pusieran especial vigilancia en la interna, constatando en el registro audiovisual que Katherine Tapia Torres entregaba un elemento a la acusada que ésta introdujo en su vagina, lo que fue informado a la capitán Ana Pino Rojas, quien trasladó a la acusada a la guardia interna, lugar donde ésta le hizo entrega de una bolsa de nylon que mantenía escondida en la cavidad vaginal y que luego de las pruebas de campo resultó ser cocaína y fármacos sujetos a control.

Por tanto, los antecedentes referidos, y atendidos los verbos rectores que se castigan en el artículo 4° de la Ley 20.000, claramente la conducta desplegada por **Lucía Andrea Vargas Palacios**, se enmarca en la autoría directa del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

**Duodécimo:** Que perjudica a la acusada la circunstancia agravante especial del artículo 19 letra h) de la Ley 20000, esto es, cometer el ilícito en un lugar de detención o reclusión, como lo fue el Centro Penitenciario mayor Marisol Estay; por cuanto se acreditó que sus actos se desplegaron en el interior del recinto penitenciario referido. El hecho de que la acusada no haya sido quien ingresó la droga al recinto penal, sino que la haya recibido de una tercera

persona, no la excluye de la aplicación de la mencionada agravante, por cuanto el tenor de la ley es claro, al señalar que la calificante es procedente si el delito fuere cometido en un recinto de detención o reclusión. Cabe hacer presente que se ha sostenido que el fundamento de dicha agravación es la feble situación psicológica y material de las personas sujetas al cumplimiento de penas al interior de estos recintos los hacen ser un grupo especialmente vulnerable a la adicción a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, situación que ha ameritado una especial protección por parte del legislador.

Fue la acusada quien recibió dos tipos de sustancias en una bolsa y las guardó al interior de su vagina, en cantidades que no permiten suponer que hayan sido para su consumo exclusivo, no sólo por la pureza de la cocaína base y la cantidad de fármacos encontrados en su poder, sino porque además, no hay ningún antecedente que dé cuenta que aquellas sustancias estaban destinadas para ser utilizadas para el consumo exclusivo de la acusada.

**Décimo Tercero:** Que, en cuanto al análisis de las argumentaciones de la Defensa y la solicitud de absolución por una presunta vulneración al principio de congruencia, porque quien habría ingresado las drogas al recinto penal fue la mujer que estaba de visita y su representada fue solo receptora de dichas sustancias, las que por su exigua cantidad pueden ser estimadas como aptas para consumo personal, cabe hacer presente que los hechos que se acreditaron permiten sostener que la conducta ilícita atribuida a la encartada se encuadra en la modalidad de **posesión y guarda**. Es así, que respecto a la posesión no sólo consiste en términos generales, al hecho de tener un poder de disposición sobre la cosa, es decir, una tenencia determinada con ánimo de señor y dueño, ya sea que esta tenencia se tenga por sí mismo o bien por otra persona a su nombre. En cuanto a las acciones tendientes a la realización de una conducta de tráfico, caber señalar que el ovoide que la acusada Lucía Vargas Palacios introdujo en su cavidad vaginal contenía cocaína base, cuya pureza alcanzó a un 52%, susceptible de ser dividida en múltiples dosis. Al respecto debe tenerse presente, que se trataba de una cantidad de droga altamente adictiva, que no es una cantidad que pueda estimarse como escasa o pequeña, para estimar que estaba destinada a su consumo, como las máximas de la experiencia indican que llega al público adicto por regla general, cualquier pureza o concentración de la droga es igualmente dañina para la salud pública, especialmente teniendo en cuenta que mientras menor sea la concentración de droga, más cantidad deberá consumir un adicto para calmar su adicción. A lo anterior debe añadirse que además de la cocaína, mantenía una serie de comprimidos del fármaco denominado Fentermina un inhibidor del apetito relacionado estructuralmente con la Anfetamina, capaz de provocar también daños a la salud.

Es por ello que la alta concentración de pureza, y la cantidad de sustancias incautadas, permiten sostener que no estaban destinadas al consumo personal y próximo en el tiempo, y por el contrario permiten presumir que podían ser puestas a disposición de parte de la población penal, al menos en su

módulo, teniendo además en consideración lo señalado por la testigo **Cristina Casanova Carreño**, quien explicó que la persona que le suministró las sustancias y que ese día visitaba a la acusada era Katherine Torres, hermana de una interna que también estaba en el módulo 4 junto a Lucía Vargas Palacios y de la cual ya se contaba con información de que traficaba droga en dicho sector.

En cuanto al principio de congruencia, si se analiza la razón del principio para entender que el mismo ha sido infringido, como dice el profesor Julio Maier (Derecho Procesal Penal, Tomo I, página 336): "La base de la interpretación está constituida por la relación del principio con la máxima de inviolabilidad de la defensa. Todo aquello que, en la sentencia, signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio estudiado." Nada de ello ocurrió en esta causa, sin perjuicio de resultar irrefutable que no se ha afectado garantía alguna, pues conoció cabalmente el contenido de la imputación, tenía copia de la investigación, pudo efectuar alegaciones, proponer y rendir prueba a su respecto.

Por otro lado la correlación entre la acusación y el fallo no puede plantearse, sobre la base de una identidad prácticamente semántica entre los hechos imputados en la primera y establecidos en la segunda, sino que, con aquellos que han sido objeto de persecución en el proceso en términos que sus elementos esenciales se mantengan, no requiriéndose lo mismo respecto de los accidentales. A su turno, la identificación de los elementos esenciales ha sido objeto de debate doctrinario planteándose teorías al respecto. Modernamente, con el objeto de solucionar los problemas que se presentan, el autor alemán Schaefer ha sostenido que en el proceso penal debe considerarse que el hecho es el mismo cuando:

1º Exista al menos identidad parcial de los actos concretos de realización. O sea, basta con que exista una porción común en el acaecer histórico de los objetos que se comparan, con tal que no se produzca una modificación jurídica sustancial por la concurrencia de los restantes supuestos del tipo penal y que,

2º Exista identidad en el contenido material de la ilicitud o del injusto aun cuando las acciones materiales sean distintas. Vale decir, las distintas acciones deben dirigirse contra el mismo bien jurídico, o formar, como acción continuada o en serie un todo desde el punto de vista valorativo

Tampoco se advierte infracción a la garantía constitucional del debido proceso, desde que el procedimiento adoptado se ajusta a la actuación interna estándar de Gendarmería y en ningún caso la mera indicación de ser revisada por un facultativo médico de la salud, más aun cuando está sometida a la custodia de Gendarmería de Chile, pueda estimarse una coacción o apremio.

En cuanto a que no hubo referencia por parte de los testigos a la cadena de custodia de las sustancias que luego aparecen periciadas, lo que hace insuficiente la prueba para llegar a un estándar de condena, cabe señalar que el

hecho de que las deponentes no hayan mencionado en su relato el número único de evidencia, no significa que la droga decomisada no pueda ser vinculada con las pericias que en definitiva fueron realizadas y menos aún se puede afirmar que no se haya podido garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales incautados. La capitán Ana Pino Rojas detalló la totalidad de los elementos que la acusada tenía en su poder, cocaína 35 gramos y fármacos, cada uno de los cuales fue remitido al servicio de salud con diferente número de evidencias, y sus resultados vinculados a cada una de esa serie de registro, entregados a los laboratorios a fin de analizar y obtener por parte de los expertos, una apreciación pericial, cuya importancia reside en que garantiza el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los hechos, pasando por los laboratorios, hasta el envío del resultado pericial correspondiente.

En consecuencia, lo ya señalado y analizado en las motivaciones precedentes, permite reafirmar que las probanzas del Ministerio Público reúnen el estándar necesario para acreditar los hechos descritos en la acusación y la participación culpable de la acusada en los mismos.

**Décimo Cuarto:** Que en la audiencia del **artículo 343 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público** incorporó el extracto de filiación y antecedentes de la acusada, en el que registra, entre otras, condena en causa RIT N° 1426/2018 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, donde por resolución de fecha 20 de enero de 2020 fue condenada en calidad de autora de un delito de lesiones menos graves a la pena de trescientos días de presidio menor en su grado mínimo; causa Rit N° 8.807/2016 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, donde por resolución de fecha 31 de enero de 2017 fue condenada como autora del delito de robo por sorpresa a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo; causa Rit 3894/2020 del 5° Juzgado de Garantía de Santiago, donde por resolución de fecha 7 de abril de 2021, fue condenada como autora del delito de tráfico de pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 3 UTM y quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, con multa cumplida. El Fiscal mantuvo las penas solicitadas en la acusación.

**Por su parte la Defensa,** solicitó se acogiera a favor de su representada la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, dado que entregó voluntariamente las sustancias incautadas. En base a ello se le impusiera la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

Pidió además que se haga uso de la facultad establecida en el artículo 70 del Código Penal y se rebaje la multa a una unidad tributaria mensual y que se le concedan parcialidades para el pago de la misma.

Concluyó su alegación solicitando se le exima del pago de las costas de las causas.

**Décimo Quinto:** Que, este Tribunal es de la opinión que beneficia a la acusada la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es

haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, pues entregó a personal de Gendarmería voluntariamente la droga que tenía escondida, la que después fue incautada y remitida a los organismos correspondientes para su respectivo análisis.

En armonía a lo reseñado precedentemente, el profesor Mario Garrido Montt explica que *“El legislador se inclinó, acertadamente, por considerar como causal de disminución de la responsabilidad la colaboración del inculcado en la investigación de los hechos, conducta que deberá valorarse concretamente por el Tribunal. Colaborar en la investigación debe entenderse como la preocupación del imputado de suministrar a la autoridad los antecedentes que provean al esclarecimiento del suceso y la participación que le habría correspondido en el mismo”* (Garrido Montt, Mario, Derecho Penal Parte General, Tomo I, pag. 200).

**Décimo Sexto: Que** Lucía Andrea Vargas Palacios, ha resultado responsable en calidad de autora del delito de tráfico ilícito de una pequeña cantidad de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, en grado consumado, que tiene asignada la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, pena que deberá considerar la calificante configurada, por lo que, se aumentará en un grado la sanción privativa de libertad y al beneficiarla una circunstancia agravante de responsabilidad penal, la pena de impondrá en el mínimo.

Que, en cuanto a la pena de multa, atendida la precariedad económica expresada por la defensa de la acusada, dado que la sanción que se le impondrá en esta causa deberá cumplirla de manera efectiva, lo que hace presumir que sus facultades económicas son disminuidas, por lo que resulta lógico entender que no podrá hacer frente a tal carga económica, lo que a juicio de estas adjudicadoras constituye un antecedente **calificado**, que justifica y a su vez permite fundamentar el ejercicio por parte de estas sentenciadoras de la facultad de eximir la pena pecuniaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 20.000.

Además la pena privativa de libertad a imponer, situada en el presidio menor en grado máximo, deja en condición de exención al responsable, al amparo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 del Código Penal, según se detallará en lo resolutivo de esta sentencia.

**Décimo Séptimo:** de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la ley 20.000 se decreta el comiso de droga incautada y sus contenedores debiendo procederse a su destrucción.

**Décimo Octavo:** Que se eximirá a Lucía Andrea Vargas Palacios del pago de las costas por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

**Décimo Noveno:** Que en relación al registro del ADN, conforme lo dispone el artículo 17 inciso 2° de la ley 19.970, **no se ordena** la toma de muestra biológicas respecto de la sentenciada considerando que el delito materia de esta sentencia es un delito de tráfico de pequeñas cantidades de

drogas o sustancias estupefacientes, que no se encuentra contenido explícitamente en el artículo 17 letra c) de la ley 19.970, disposición que se refiere únicamente a los delitos de elaboración o tráfico de drogas, que claramente son los crímenes referidos en los artículos 1 y 3 de la ley 20.000, cuya gravedad, en cuanto a la penalidad resulta asimilable a los ilícitos de carácter terrorista a que alude sucesivamente la letra c) del artículo 17, contexto normativo en el cual, claramente, no se encuentra comprendido el microtráfico, que sólo es un simple delito.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 11 N° 9, 21, 25, 26, 30, 31, 49, 50, 68 y 70 del Código Penal; artículos 1, 3, 4, 40, 45, 46 y 52 de la Ley 20.000 y 1, 8, 45, 108, 295, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 342, 343, 346, 347 y 348 del Código Procesal Penal, se declara:

**I.-** Que se condena a **LUCÍA ANDREA VARGAS PALACIOS**, ya individualizada, a la pena de **TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autora de tráfico ilícito de una pequeña cantidad de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, en grado consumado, perpetrado el día 1 de diciembre de 2018, en la comuna de San Miguel.

Que, dado que la acusada no reúne los requisitos que la hacen merecedora de una pena sustitutiva, deberá cumplir ésta real y efectivamente, no habiendo abonos de tiempo que realizar a su favor.

**II.-** Se dispone el comiso de la droga, los contenedores debiendo procederse a su destrucción.

**III.-** Que se exime a la sentenciada del pago de las costas de la causa.

**IV.-** Que no se ordena la toma de muestras biológicas respecto de la sentenciada, en razón de lo razonado en el motivo pertinente de este fallo.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, dése cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Regístrese y archívese.

Redactada por la Magistrado doña Gloria Isabel Canales Abarca.

**RUC N°1801186533-6**

**RIT N° 541-2019**

**PRONUNCIADA POR LA SALA DEL SEXTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LAS JUEZAS TITULARES DOÑA PAULA RODRÍGUEZ FONDÓN, EN CALIDAD DE JUEZA PRESIDENTA DE SALA, GLORIA CANALES ABARCA, COMO JUEZA REDACTORA Y DOÑA NORA ROSATI JEREZ, COMO TERCERA JUEZA INTEGRANTE, TODAS SUBROGANDO LEGALMENTE.**